



**DIP. MANUEL GUERRERO LUNA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. XXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
P R E S E N T E.-**

HONORABLE ASAMBLEA

El año pasado esta legislatura hizo esfuerzos para colaborar con el Poder Ejecutivo con la visión de contar con un Estado sólido en sus finanzas y proporcional a los programas públicos que son vitales para la sociedad de Baja California, en este tenor se avecinaba una serie de solicitudes en cuanto a permisos para adquirir deuda, esto con la perspectiva de que probablemente faltaría dinero por parte del gobierno federal en cuanto a la participación que Baja California es acreedora.

Hoy vemos que los fondos Federales además de ser recortados, también nos recortan participaciones, un Estado tan pujante como lo es nuestra Baja California no puede tener este tipo de conflictos y quiebres a mitad de año, es una total irresponsabilidad e incluso podrían hasta ser delitos si es que se llegaran a demostrar, que el recorte de los presupuestos federales más bien sean una suerte de desvíos a fondos y programas diversos.

En el corazón de la estructura financiera de México yace un elemento crítico conocido como el "pacto fiscal", un acuerdo que regula cómo se distribuyen los recursos federales entre los estados. Aunque en teoría debería asegurar una distribución equitativa de los ingresos, en la práctica, esta estructura de reparto se ha convertido en un foco de discordia y descontento entre los estados y el gobierno federal.

La creación del pacto fiscal se remonta a tiempos pasados, cuando las condiciones y necesidades económicas eran diferentes. A medida que el país ha evolucionado y enfrentando nuevos desafíos, este pacto no ha sido ajustado para reflejar las realidades actuales. Como resultado, nos encontramos en una situación en la que la asignación de recursos no está proporcionalmente alineada con las necesidades cambiantes de los estados.

Una de las manifestaciones más preocupantes de esta disparidad es la falta de recursos federales que llegan a los estados. A pesar de que se recaudan impuestos a nivel nacional, los estados a menudo se enfrentan a dificultades financieras para satisfacer las demandas de sus poblaciones. Esto es aún más preocupante cuando se consideran los recortes a fondos esenciales como el de seguridad, SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios), PRONAPRED (Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia) y el fondo para desastres naturales.

La seguridad es una prioridad fundamental para cualquier sociedad. Sin embargo, la reducción de fondos destinados a la seguridad pública a nivel local y estatal pone en peligro la capacidad de las autoridades para mantener la paz y el orden en sus comunidades. La prevención de la violencia y la delincuencia también sufre un golpe, ya que los recursos limitados obstaculizan la implementación de programas efectivos para abordar estas problemáticas.

En lo que respecta a los desastres naturales, México es vulnerable a una amplia gama de fenómenos climáticos y geológicos. La falta de financiamiento adecuado para la gestión y mitigación de desastres representa un riesgo significativo para la seguridad y el bienestar de la población. Sin los fondos necesarios, la respuesta a situaciones de emergencia se ve limitada y la capacidad de reconstrucción después de un desastre se ve gravemente comprometida.

En resumen, el sistema actual del pacto fiscal en México presenta desafíos claros en términos de equidad y adaptación a las necesidades actuales de los estados. Los recortes en áreas críticas como seguridad y prevención de desastres están teniendo un impacto negativo en la capacidad de los estados para servir y proteger a sus ciudadanos. Es imperativo que se realicen cambios sustanciales en la asignación de recursos para asegurar que los estados tengan los medios financieros necesarios para enfrentar los desafíos contemporáneos y brindar servicios esenciales a sus poblaciones.

Urge una revisión profunda del pacto fiscal, con la participación activa de los estados y un compromiso genuino para abordar las deficiencias en la asignación de recursos. Solo a través de una distribución justa y equitativa de los fondos federales, adaptada a las necesidades actuales, podremos construir un México más seguro, resiliente y próspero para todos.

Además de la profunda necesidad de modificar el pacto fiscal, es sumamente necesario que el Gobierno Federal reactive los programas de prevención a los cuales dejó sin un solo centavo, también urge que envíen recursos para la energía eléctrica de Baja California y, sin olvidar mencionar, que es una completa grosería y falta de respeto a los bajacalifornianos que así como así nos dejen sin más de 1,300 millones de pesos de las participaciones federales, con gobiernos así no podemos asegurar que México vaya por buen rumbo.

Dado en el Salón de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del Congreso del Estado en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 10 días del mes de agosto de 2023.

“2023, Año de la Concienciación sobre las Personas con Trastorno del Espectro Autista”



DIP. DAYLÍN GARCÍA RUVALCABA
MOVIMIENTO CIUDADANO

**INTEGRANTE DE LA XXIV LEGISLATURA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**